ANTONIO ROMULO LUNA v. AGENCIA MARITIMA RIGEL S.A. Y OTROS

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Principios generales.

Aunque las cuestiones debatidas sean ajenas por su naturaleza al recurso extraordinario, la prescindencia de circunstancias concretas del caso, la omisión de una adecuada exégesis de las normas invocadas y el apoyo en pautas de excesiva latitud, constituyen causales de procedencia de dicha apelación, ya que redundan en menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales y lesionan gravemente el derecho de defensa en juicio.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales.

En el caso en que se trata de la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo concurren las circunstancias excepcionales en relación con la trascendencia y significación del caso requeridas por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tanto desde el punto de vista de las relaciones laborales como de las diversas modalidades de contratación comercial, pues la solución puede contribuir a afianzar la seguridad jurídica y poner un necesario aquietamiento en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas.

DERECHO DEL TRABAJO.

La regulación de las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de justicia, constituye un deber para el Estado, y las consecuencias que puedan derivar del cumplimiento de ese deber representan una contingencia de la cual la empresa contemporánea no puede desentenderse, en tanto subsista la relación de trabajo.

DERECHO DEL TRABAJO.

Tratándose de cargas razonables, que impliquen prestaciones que no sean exorbitantes o expolatorias, rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa, que de ningún modo podría hacerse depender jurídicamente de la subsistencia de regímenes inequitativos.

DERECHO DEL TRABAJO.

La función estatal de regulación de las relaciones de trabajo afecta de manera particularmente honda la tranquilidad y la paz pública, y responde a principios de justicia, cuya observación también incumbe a la empresa contemporánea, que ésta asume regularmente por la vía de su cumplimiento.

DERECHO DEL TRABAJO.

En la denegación de beneficios de naturaleza alimentaria, como los que informan el derecho del trabajo, ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las normas han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulte incompatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial.

DERECHO DEL TRABAJO.

En relación con los principios de interpretación del derecho del trabajo, cabe tener presente sus finalidades, sobre todo sus aspectos protectorios, pero, por otro lado, también la necesidad de equilibrio de fuerzas e intereses opuestos y considerar la finalidad del bienestar colectivo mediante una interpretación deontológica, amparando los derechos de ambas partes en la medida en que la igualdad jurídica es compatible con aquellos aspectos tuitivos.

DERECHO DEL TRABAJO.

En la tutela de los créditos laborales el intérprete debe extremar su cautela frente a las hipótesis de insolvencia o fraude, pero no a riesgo de poner en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente, pues ello podría conducir a debilitar la confianza en el régimen jurídico como sistema de contrapesos destinado a otorgar seguridad a las relaciones económicas, entre otras.

DERECHO DEL TRABAJO.

Resulta imperativa para la labor judicial la fijación de pautas claras que aseguren el adecuado balance entre los intereses eventualmente contrapuestos de trabajadores y empleadores, no ya con miras exclusivas al ámbito jurídico nacional sino también al internacional, máxime cuando —como en el caso— la actividad atañe a la exportación.

DERECHO DEL TRABAJO.

Conforme con el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deben exigir el adecuado cumplimiento de las normas del derecho del trabajo y la seguridad social, y son solidariamente responsables por tales obligaciones durante la vigencia del contrato de trabajo o al tiempo de su extinción.

CONTRATO DE TRABAJO.

La solidaridad establecida por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo se refiere a las empresas –organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades– que, teniendo una actividad propia normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y asunción de riesgos empresariales.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la fundamentación normativa.

Es descalificable la sentencia que –basada en afirmaciones dogmáticas– estableció la responsabilidad solidaria de una exportadora por el pago de las diferencias de salarios reclamados por un grupo de trabajadores, –estibadores– contra su empleadora y otras empresas, ya que colegir que se trata de la prestación por un tercero de una “actividad normal y específica propia del establecimiento” (art. 30, Ley de Contrato de Trabajo), generadora de solidaridad por cesión total o parcial es extender desmesuradamente el ámbito de aplicación de la norma de un modo que su texto no consiente.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Principios generales.

Es inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que estableció la responsabilidad solidaria de una exportadora por el pago de diferencias salariales reclamadas por un grupo de trabajadores –estibadores– contra su empleadora y otras empresas (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 2 de julio de 1993.

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por Nidera Argentina S.A. en la causa Luna, Antonio Rómulo c/ Agencia Marítima Rigel S.A. y otros”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que, al confirmar la del tribunal de trabajo, impuso la responsabilidad solidaria de Nidera S.A. por el pago de las diferencias de salarios reclamadas por un grupo de trabajadores contra su empleadora y otras empresas, la codemandada vencida dedujo el recurso extraordinario cuya denegación motivó la queja en examen.

Para así decidir, el *a quo* consideró que el tribunal de grado había determinado que la responsabilidad solidaria era indudable, “pues reconoció que la otra Rigel le atendía las tareas de estibaje, es decir cargar en barcos el cereal que exportaba”; que la diferenciación entre empresa y establecimiento en lo que respecta a la aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo resultaba irrelevante en el caso, en virtud de la relación entre la específica actividad de la empresa Nidera –la exportación– y la coadyuvante y necesaria por la que se vinculó contractualmente con la otra Rigel –la estiba de los productos exportados–. Agregó que no se había demostrado el quebrantamiento del citado artículo 30, toda vez que la codemandada contrató con Rigel servicios que si bien podían calificarse de accesorios correspondían a su actividad normal y específica.

2º) Que con sustento en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, la recurrente se agravia y formula diversas tachas relativas a la afectación de sus garantías constitucionales, en especial al derecho de defensa. En su opinión, el *a quo*, sin dar razones para ello, ha incurrido en un violento apartamiento del texto de la ley, ya que no sólo ha extendido desmesuradamente la aplicación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que no ha considerado –en particular relación con las circunstancias de la causa– los conceptos que la misma ley de contrato de trabajo expresa respecto de la empresa y el establecimiento.

3º) Que, no obstante que las cuestiones debatidas sean –como se advierte– ajenas por su naturaleza a la esfera del recurso extraordinario, la prescindencia de circunstancias concretas del caso, la omisión de una adecuada exégesis de las normas invocadas y el apoyo en pautas de excesiva latitud, constituyen causales de procedencia de la apelación planteada, ya que redundan en el menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales y, por ende, lesionan gravemente el derecho de defensa en juicio de la impugnante.

4º) Que a ello cabe agregar que concurren en el *sub examine* las circunstancias excepcionales en relación con la trascendencia y significación del caso requeridas por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tanto desde el punto de vista de las relaciones laborales como de las diversas modalidades de contratación comercial, pues la solución del presente caso puede contribuir a afianzar la seguridad jurídica y poner un necesario aquietamiento en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que —en relación con la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo— distan de ser pacíficas, como surge de numerosos pronunciamientos dictados en distintos fueros laborales.

En esas condiciones, corresponde habilitar la vía extraordinaria y hacer uso de la facultad que concede a esta Corte el art. 16 de la ley 48 para pronunciarse respecto del fondo del asunto.

5º) Que un grupo de trabajadores (estibadores en el puerto de San Nicolás) demandó a su empleadora —la Agencia Marítima Rigel S.A.— y a varias empresas más por diferencias de salarios abonados durante el período comprendido entre mayo de 1984 y marzo de 1985, reclamo que después hicieron extensivo a la codemandada Nidera S.A. Según se desprende del veredicto y la sentencia del tribunal de grado, la demandada principal se dedicó a la carga de buques con cereales; no así las otras dos codemandadas; en cuanto a Nidera S.A. —reconocido su objeto como exportadora de cereales— se relacionó contractualmente con la empresa de trabajos portuarios para la carga de cereal, a realizarse en el muelle después de ser traído en camiones y a granel hasta ese lugar. De tal modo, la sentencia desestimó el reclamo en cuanto a dos codemandadas, la admitió contra la empresa de estibajes empleadora e hizo extensiva la responsabilidad por la condena a la exportadora, ya que la primera “le atendía las tareas de estibaje, es decir cargar en barcos el cereal que ella exportaba”.

Como quedó dicho, la Corte provincial consideró, en lo relacionado con las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal, que ese contrato incluyó servicios que si bien podían calificarse de “accesorios” correspondían a la actividad “normal y específica” de la compañía exportadora ya que la estiba era coadyuvante y necesaria, por lo cual era irrelevante la diferenciación entre establecimiento y empresa.

6º) Que no desconoce esta Corte los principios especiales que informan el derecho del trabajo desde su nacimiento en el país. Ya en los

casos de Fallos: 176:22; 181:209; 208:430 y sus citas; 238:496 y sus citas; y más aún en Fallos: 252:158, se señaló que la regulación de las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de justicia, constituye un deber para el Estado, y las consecuencias que puedan derivar del cumplimiento de ese deber representan una contingencia de la cual la empresa contemporánea no puede desentenderse, en tanto subsista el vínculo de trabajo. Dicho de otro modo, tratándose de cargas razonables, que impliquen prestaciones que no sean exorbitantes o expoliatorias, rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa, que de ningún modo podría hacerse depender jurídicamente de la subsistencia de regímenes inequitativos. Ha reconocido reiteradamente, además, que la función estatal de regulación de las relaciones de trabajo afecta de manera particularmente honda la tranquilidad y la paz pública, y responde a principios de justicia, cuya observación también incumbe a la empresa contemporánea, que ésta asume regularmente por la vía de su cumplimiento (Fallos: 262:102; 263:529 y 545). Reafirmó asimismo que en la denegación de beneficios de naturaleza alimentaria, como los que informan el derecho del trabajo ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las normas han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulte incompatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial. Del mismo modo, ha reiterado la doctrina de Fallos: 307:1246, considerandos 5º y 6º y sus citas, en el sentido de que el resultado a que se arribe no debe importar un apartamiento palmario de la realidad económica con grave menoscabo de la verdad jurídica objetiva.

Como expresó con acierto Ernesto Krotoschin en relación con los principios de interpretación del derecho del trabajo, cabe tener presente sus finalidades, sobre todo sus aspectos protectorios, pero, por otro lado, también la necesidad de equilibrio de fuerzas e intereses opuestos y considerar la finalidad del bienestar colectivo mediante una interpretación deontológica, amparando los derechos de ambas partes en la medida en que la igualdad jurídica es compatible con aquellos aspectos tuitivos señalados; ello es consecuencia, a su vez, de que el elemento motivador del derecho laboral tiende a construir y organizar un sistema que garantice la colaboración constante de todos los que intervienen en el trabajo (Instituciones de Derecho del Trabajo, edición de 1947 y Tratado, edición de 1981).

7º) Que, habida cuenta de que la tutela de los créditos laborales constituye una de las derivaciones de aquel principio protectorio, el intérprete debe extremar su cautela frente a las hipótesis de insolvencia o fraude; pero no a riesgo de poner en tela de juicio otros derechos también garantizados constitucionalmente, pues ello podría conducir a debilitar la confianza en el régimen jurídico como sistema de contrapesos destinado a otorgar seguridad a las relaciones económicas, entre otras. De tal modo, resulta imperativa para la labor judicial la fijación de pautas claras que aseguren el adecuado balance entre los intereses eventualmente contrapuestos de trabajadores y empleadores, no ya con miras exclusivas al ámbito jurídico nacional sino también al internacional; máxime cuando —como en el *sub examine*— la actividad atañe a la exportación.

Adviértase que, por ejemplo, en la aprobación parlamentaria mediante la ley 23.981, del Tratado para la constitución de un Mercado Común entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Mercosur, uno de los elementos claves puestos de relieve por el legislador, consistió en la modernización de las economías a fin de ampliar la oferta y la calidad de bienes y servicios disponibles y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes. En el marco de dicho Tratado se ha efectivizado ya la constitución del subgrupo dedicado a las ineludibles cuestiones laborales y sociales propias de un proceso de integración. Frente a esa importancia reconocida por el legislador en el marco del derecho internacional, a la vinculación entre los aspectos comerciales y el derecho del trabajo, las pautas de interpretación de este último —mencionadas en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia— deben contemplar necesariamente la estabilidad de las relaciones jurídicas de modo de no soslayar la imprescindible previsión de riesgos que se tienen en mira al contratar y realizar inversiones (confr. Cámara de Senadores de la Nación, Diario de Sesiones, días 24 y 25 de julio; Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, días 14 y 15 de agosto, ambos de 1991).

8º) Que en ese marco de referencia, cabe tener en cuenta la finalidad perseguida por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme con el cual quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera que sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deben exigir el ade-

cuado cumplimiento de las normas del derecho del trabajo y la seguridad social, y son solidariamente responsables por tales obligaciones durante la vigencia del contrato de trabajo o al tiempo de su extinción.

Con ello se persigue evitar la interposición de “hombres de paja” entre un trabajador y su verdadero empleador, y realizar los fines del ordenamiento laboral y del sistema de seguridad social (confr. opinión del senador Pennisi, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, año 1974, Tº I, págs. 480/481). Para ello el artículo citado se refiere específicamente al establecimiento, esto es, “la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones” (art. 6º, L.C.T.), en los casos en que se complete o complemente su real actividad, aunque ésta sea inherente a la dinámica del giro comercial y no se persiga el propósito de fraude.

En el *sub examine*, dadas sus particularidades, cabe agregar a esa distinción entre empresa y establecimiento, que debe tenerse en cuenta que la regulación legal no implica que todo empresario deba responder por las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establece contratos que hacen a la cadena de comercialización o producción —ya se trate de bienes o servicios—, máxime frente a la gran variedad de contratos que se generan actualmente en el seno de las relaciones interempresariales y el vasto campo comercial de relaciones que así se manifiestan. Puede señalarse, a modo de ejemplo, el suministro de productos determinados con desligamiento expreso de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución; los contratos de concesión, distribución, franquicia, “engineering”, fabricación de partes, accesorios, etc. y su posterior venta, entre muchos otros.

Ello es así pues, dada la redacción del precepto en cuestión queda en claro que la solidaridad está impuesta *ex lege* a las empresas —organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades— que, teniendo una actividad propia normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y asunción de riesgos empresariales. La asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la sola noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvimiento empresario. Si

tanta amplitud fuera admitida mediante la interpretación judicial, caería en letra muerta no sólo el texto legal sino la posibilidad cierta de que más empresas asuman los riesgos propios del desarrollo económico. Máxime si el resultado de la interpretación deja plenamente vigente la debida tutela de los derechos del trabajador en los supuestos en que sus créditos, así como los de la seguridad social, puedan estar afectados.

9º) Que en el *sub examine*, es claro que —como expresó el *a quo*— la carga de los cereales en los buques es un paso necesario para su exportación, así como su transporte antes y después de la salida de puerto. No se podría concebir de otro modo. También lo es —y ha sido probado en la causa— que la actividad de una de las empresas está destinada a la carga y otra —de la otra empresa— a la exportación mediante la utilización de diferentes buques y por determinados períodos. Está asimismo acreditado que los demandantes eran dependientes de la primera de ellas, sin vinculación laboral con la segunda. No se ha probado ni alegado que exista relación entre las codemandadas más allá de la atención de esa carga durante el período en cuestión en los días señalados en los informes de la Administración General de Puertos, de la Prefectura Naval Argentina y de la Capitanía de Puertos del Litoral Fluvial, durante los cuales la empresa de estibaje atendió también a otras exportadoras; ni que los créditos laborales afrontaran posibilidad alguna de insolvencia.

Colegir de aquellas coincidencias —corrientes en quienes participan en el desenvolvimiento de un proceso comercial que se desarrolla en diversas fases complementarias— que se ha configurado en este caso una hipótesis de la prestación por un tercero de una “actividad normal y específica propia del establecimiento”, en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, generadora de solidaridad por cesión total o parcial, es extender desmesuradamente el ámbito de aplicación de la norma de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines, y que por eso debe ser descartado.

10) Que, media en el caso el nexo necesario entre lo debatido y resuelto y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48), habida cuenta de que el *a quo* basó su pronunciamiento en afirmaciones dogmáticas que no constituyen fundamento suficiente de la sentencia recurrida y que, por su excesiva latitud y apartamiento de las constancias probadas de la causa, lesionan gravemente el derecho

de defensa de la apelante. En consecuencia, se impone su descalificación y, por las razones desarrolladas en el considerado 9º, la desestimación de la pretensión propuesta por la parte actora respecto de la recurrente.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se rechaza la demanda respecto de Nidera Argentina S.A. Con costas. Reintégrese el depósito de fs. 1. Agréguese la queja al principal, hágase saber y, oportunamente, envíese.

ANTONIO BOGGIANO — RODOLFO C. BARRA — CARLOS S. FAYT (*en disidencia*)
— AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — RICARDO LEVENE (H) — EDUARDO MOLINÉ
O'CONNOR.

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, es inadmisibles (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el depósito de fs. 1. Devuélvanse los autos principales. Hágase saber y, oportunamente, archívese.

CARLOS S. FAYT.

RAFAEL MARCHESI Y OTROS V. AUTOLATINA ARGENTINA S.A.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la consideración de extremos conducentes.

Es arbitraria la sentencia que —al hacer lugar a los reclamos por diferencias en la compensación por retiro voluntario— no tuvo en cuenta que las cláusulas de tal